

UNIVERSIDAD DE CONCEPCION
ESCUELA DE DERECHO
CHILE

Quintiliano Monsalve Jara
ABOGADO

REVISTA
DE
DERECHO

SEGUNDA EPOCA

AÑO XXXIX — Nº 155 — ENERO - ABRIL DE 1971

Director
JUAN ARELLANO ALARCON

Sub-Director (interino)
RENATO GUZMAN SERANI

Reclamo sobre Conducta Profesional

COLEGIO DE ABOGADOS DE TEMUCO

Sin embargo, la realidad derivada de las relaciones entre cliente y letrado, no permite a éstos exigir de aquéllos la provisión correspondiente a las presuntas costas del juicio, por lo que no está conforme a la equidad natural responsabilizar personalmente al mandatario de su pago.

Sólo en los asuntos elevados a la resolución de la Excelentísima Corte Suprema, los Procuradores del Número que representan a las partes litigantes, exigen de éstas una determinada provisión de fondos para responder de las eventuales costas, situación que no se presenta ni es posible aplicar, como regla general, por lo que el precepto del artículo 28 del Código de Procedimiento Civil, constituye hoy día una norma que en la realidad no tiene aplicación.

Por lo demás, la citada disposición nació bajo el imperio del mandato judicial voluntario, que no obligaba al letrado a asumir la representación de su patrocinado. Existiendo en la actualidad, el mandato forzoso que en materia judicial establece el artículo 41 de la Ley Orgánica del Colegio de Abogados, esta norma aparece distorsionada por la realidad.

En consecuencia, no es procedente el cobro de las costas al apoderado del que no ha obtenido en el pleito.

Temuco, treinta y uno de marzo de mil novecientos setenta y uno.

DOCTRINA

*El artículo 28 del Código de Procedimiento Civil debería entenderse en el sentido de que las cargas pecuniarias a que están sujetos los litigantes y de las que responden personalmente los procuradores judiciales, comprenden todas las costas, tanto procesales como personales. Este sentido guarda relación con lo establecido en el artículo 2158 del Código Civil, de cuyo texto fluye que todo mandatario se supone expensado para hacer frente a los gastos necesarios para la ejecución del mandato.

VISTOS:

N. N., abogado, de este domicilio, expresa que en el proceso criminal por cuasidelito de lesiones a X. X., tramitado en el Juzgado del Crimen de esta ciudad, se dictó sentencia de segunda instancia por la cual fue condenado el reo A. A. a la pena de sesenta días de prisión, suspensión por el término de seis meses para conducir vehículos motorizados, a pagar una indemnización de E\$ 14.378.— y las costas de la causa, remitiéndosele condicionalmente la pena privativa de libertad, habiendo tenido la defensa del reo el recurrente, y la del querellante particular, don

R. R. Una vez ejecutoriado el referido fallo, el señor R. R. solicitó la tasación de costas procesales y la regulación de las personales, todo lo cual arrojó un monto de E° 5.571. De esta liquidación se conformó el reo de la causa, habiendo sido notificado personalmente de ella, en atención a que el recurrente había renunciado al patrocinio y mandato respectivos. En las condiciones expuestas el señor R. R. pidió el cumplimiento de la sentencia "en lo que respecta a las costas", dirigiendo su acción en contra del recurrente, a virtud de la disposición del artículo 28 del Código de Procedimiento Civil. Como resultado de esta gestión el señor R. R. obtuvo la traba de embargo por la suma antes indicada sobre la cuenta corriente del señor N. N. en el Banco Sur de Chile, Oficina de esta ciudad.

Con arreglo a los hechos anteriormente expuestos, don N. N. dedujo reclamación en contra del letrado don R. R., igualmente domiciliado en esta ciudad, por su conducta profesional que califica de incorrecta, por ser contraria a los principios de ética, fraternidad, respeto y caballerosidad, elementales entre actuación de los abogados entre sí; actitud —agrega— evidentemente inmoral y desleal, por las razones que señala a continuación, haciendo referencia en este sentido a lo siguiente:

—Al alcance que, a su juicio, tiene la disposición del artículo 28 del Código de Procedimiento Civil, que legisla sobre la responsabilidad pecuniaria del mandatario en juicio;

—Que los abogados sólo exigen a sus patrocinados, una suma razonable para atender a los gastos que aquél demande, en atención a que no existe precepto alguno en el Arancel ni en ningún otro cuerpo legal, que los faculte para exigir a sus clientes el depósito de una suma de dinero que permita financiar las costas procesales y personales a que pudiese ser condenado el representado;

—Que en el hecho es difícil obtener ese financiamiento de parte de los clientes;

—Que en los juicios criminales sería prácticamente imposible obtener una defensa profesional para el reo, toda vez que el defensor estaría expuesto a la condena en costas, no obstante que el objetivo de la defensa, generalmente, es obtener una pena favorable, más que lograr una justificación del hecho;

—Que la presunción del artículo 28 del citado Código es simplemente legal, pues los abogados jamás reciben expensas para los juicios, de manera que hacer recaer la responsabilidad del pago de costas sobre el abogado a sabiendas de lo anterior, resulta contrario a la ética profesional;

—Hace referencia a los diversos medios legales de que disponen las partes para garantizar el pago de las costas del juicio, los que no fueron utilizados por el querellante particular;

—Que, en la especie, el señor R. R. tenía conocimiento de la renuncia del reclamante y de sus fundamentos, por lo cual fue inmoral recurrir a la presunción del citado artículo 28 para obtener el pago de sus honorarios;

—Que el reclamado fue negligente para proceder al embargo de los bienes del reo;

—Que se ha limitado a exigir el pago de las costas del juicio al mandatario, sin haberse preocupado de cobrar el monto de la indemnización a la parte misma;

—Que el señor R. R., para accionar ejecutivamente en su contra, trabando embargo sobre los fondos que tenía en el Banco Sur de Chile, aprovechó su ausencia en Santiago, con el propósito evidente de causarle descrédito y perjudicarlo ante la opinión pública y personal del Banco; y

—Finalmente, que el embargo era innecesario en atención a la solvencia del recurrente.

Termina solicitando del Honorable Consejo se acoja el reclamo y se apliquen al abogado don R. R. las sanciones que

fueren procedentes, como también se obligue al reclamado a la restitución de la suma de dinero que obtuvo mediante el embargo antes mencionado.

Contestando la reclamación, don R. R. solicita el rechazo de ésta, expresando que, estando pendiente la notificación al querrellado A. A., del "Cúmplase" recaído en la sentencia ejecutoriada del juicio mencionado por el recurrente, pidió en contra de A. A. la medida prejudicial precautoria de prohibición de enajenar, gravar y de celebrar cualquier acto o contrato respecto de su cuota hereditaria en la sucesión de su padre don C. C.; pero esta medida quedó frustrada por la actitud del abogado señor N. N., que había redactado una minuta que se tradujo en la cesión de la cuota hereditaria del querrellado en favor de su madre, según escritura otorgada en la Notaría de Victoria con fecha 27 de septiembre de 1967, coincidiendo con la oportunidad en que el mismo profesional presentaba el escrito de contestación de la acusación en favor de A. A. Hace presente que en dicha escritura se estipuló un precio irrisorio (E° 5.000.—) por la venta de la cuota hereditaria, en circunstancias que la parte que correspondía al querrellado no podía estimarse en menos de E° 33.000.—, lo que hace fácil comprender que esta operación tenía por finalidad eludir la responsabilidad civil del reo y el pago de las costas judiciales. De esta suerte —agrega—, el abogado contra quien se dirige la reclamación, a la postre quedó burlado en su trabajo profesional de más o menos siete años, como asimismo los derechos de su cliente, que fueron establecidos por sentencia ejecutoriada.

En presencia de este resultado y haciendo uso de una disposición legal, como es el artículo 28 del Código de Procedimiento Civil, dedujo acción por su representado en contra del abogado don N. N. como procurador del querrellado, a fin de que cumpliera con el pago de las costas. De esta manera, su actuación, encuadrada estrictamente en el marco legal, no puede ser calificada como "inmoral y desleal", como se dice en la reclamación, siendo estas expresiones malévolas o injuriosas respecto de su persona. Manifiesta, ade-

más, que el reclamante es el menos llamado a observarle su conducta profesional, y al efecto señala que, habiendo sido víctima de una agresión por parte de un tercero el día de las elecciones de regidores de 1967, el señor N. N. no tuvo reparo en asumir la defensa del hechor en primera y segunda instancias, habiendo sido condenado el reo, en definitiva, a sesenta días de prisión incommutables y al pago de E° 1.500.— de indemnización por daño moral. En esa oportunidad, el señor N. N. se olvidó de los principios de ética, fraternidad, respeto y caballerosidad, que ahora invoca injustamente.

En relación con los hechos expuestos por el abogado señor R. R., el reclamante deja constancia que el querrellado le entregó su defensa con fecha 29 de septiembre de 1967, habiendo presentado el escrito de contestación de la acusación el 2 de octubre de dicho año; y que es efectivo que en el proceso seguido en contra de P. P., por lesiones al señor R. R., asumió la defensa del reo, a petición del colega M. M., concretándose en su actuación profesional a dejar las cosas en su lugar, evitando que el reo fuese condenado por un hecho de gravedad diferente al que realmente había cometido.

CON LO RELACIONADO Y TENIENDO PRESENTE:

1º) Que el problema referente a la órbita de aplicación legal del artículo 28 del Código de Procedimiento Civil, que el reclamante plantea como premisa básica en la especie sometida a la consideración de este Consejo, fue resuelto por sentencia de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de esta jurisdicción, de fecha 10 de julio de 1969, confirmatoria del fallo de primera instancia, en el sentido de que las cargas pecuniarias a que están sujetos los litigantes y de las cuales responden personalmente los procuradores judiciales, sin perjuicio de la responsabilidad de sus mandantes, comprenden todas las costas que sean de cargo de éstos, a saber, procesales y personales, lo cual guarda rela-

ción —agregan los sentenciadores— con lo estatuido en el artículo 2158 del Código Civil, de cuyo texto fluye que todo mandatario se supone expensado para hacer frente a los gastos necesarios para la ejecución del mandato, quedándole a salvo, naturalmente, su derecho para exigir del poderdante el reembolso de las cantidades de dinero utilizadas en dichos pagos; y estando esta interpretación abonada, además, por la historia del mencionado precepto legal, que deja en claro que éste se refiere a toda clase de costas.

2º) Que, no obstante lo anterior, el mismo fallo, en su fundamento sexto, deja constancia que, al margen de la dilucidación estrictamente legal encuadrada en la legislación positiva, la realidad derivada de las relaciones entre cliente y letrado, no permite a éstos exigir de aquéllos la provisión correspondiente a las presuntas costas del juicio, por lo que no está conforme a la equidad natural responsabilizar personalmente al mandatario de su pago, apreciación que si bien es cierto se ajusta a las normas puras de justicia, no puede prosperar ante el enjuiciamiento positivo del caso sometido a la decisión judicial.

3º) Que es, precisamente, la apreciación marginada de la resolución judicial, la que corresponde considerar y resolver por este Consejo, en términos de establecer si la conducta del abogado don R. R., al hacer efectiva la responsabilidad pecuniaria por concepto de costas judiciales de la causa mencionada, en el apoderado del querellado, don N. N., ha estado o no a las normas de ética profesional que los colegiados de la Orden deben guardar entre sí.

4º) Que es de toda evidencia que el precepto del artículo 28 del Código de Procedimiento Civil constituye hoy día una norma anacrónica, pues, con excepción de los asuntos judiciales elevados a la resolución de la Excelentísima Corte Suprema, en que los Procuradores del Número que representan a las partes litigantes exigen de éstas una determinada provisión de fondos para responder a las

eventuales costas inherentes a esos recursos, no ocurre lo mismo en las instancias del juicio, donde, por lo general, es el propio abogado patrocinante quien inviste el rol de mandatario de la parte, y bien se sabe que el abogado asume esta calidad para los efectos de dar cumplimiento al mandato forzoso que en materia judicial establece el artículo 41 de la Ley Nº 4409, disposición que obedece a las finalidades específicas que la inspiraron, ajenas, por cierto, al esquema del mandato que voluntariamente se constituía con arreglo a las solas normas de la ley procesal. De ahí, entonces, que la citada disposición del artículo 28 del Código de Procedimiento Civil, nacida bajo el imperio del mandato voluntario, que no obligaba al letrado a asumir la representación judicial de su patrocinado, aparezca en la actualidad distorsionada por la realidad, toda vez que, en la práctica, no se da el caso que el patrocinante, al pedir la cuota de honorarios a que tiene derecho según el artículo 10 del Arancel del Colegio de Abogados de esta jurisdicción, exija, además, a su cliente una provisión adicional para responder a una posible condenación en costas, actitud que, naturalmente, produciría un efecto psicológico negativo en el ánimo de este último.

5º) Que de la reflexión precedente se sigue que el caso que motiva la reclamación de autos constituye un caso típico de abuso del derecho, toda vez que se ha recurrido al cumplimiento forzado de una obligación que contempla la ley vigente, a sabiendas que no se compadece con la realidad surgida del imperativo legal que establece el mandato judicial forzoso.

6º) Que es obvio que la conducta del abogado reclamado en el caso que nos ocupa, no ha sido ecuánime en relación con el colega que tuvo a su cargo el patrocinio y la representación del querellado en la causa antes mencionada, dejándose llevar por una animadversión personal y faltando, de esta manera, al deber de fraternidad profesional que establece el artículo 40 del Código de Ética aprobado por el Consejo General del Colegio de Abogados.

7º) Que, en cuanto a las intervenciones pretéritas del abogado señor N. N. que el reclamado representa como motivaciones legítimas de su proceder, no pueden considerarse como justificación de su conducta, pues ello implica hacerse justicia por sí mismo, en circunstancias que el afectado tuvo el camino expedito para formular la o las reclamaciones del caso en su debida oportunidad, atento a lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley Nº 4409.

Y de conformidad con lo dispuesto, además, en los artículos 4º, 12 letra a), 16, 21, 22, 24 y 27 de la Ley Orgánica del Colegio de Abogados, y 1º y 5º del Código de Ética Profesional aprobado por el Consejo General de la Orden,

SE DECLARA:

1º.—Se acoge la reclamación interpuesta por el abogado don N. N. en contra del

abogado don R. R., aplicándose a este último la medida disciplinaria de **CENSURA POR ESCRITO**; y

2º.—No ha lugar a la restitución de la suma de dinero percibida por el reclamado, en atención a que esta materia se encuentra comprendida en el fallo dictado por la Justicia Ordinaria, referente a los mismos hechos que motivan la presente reclamación.

Devuélvase al recurrente el monto de la suma depositada en autos, cuya boleta fue acompañada a la reclamación.

Se llama la atención al reclamante por el empleo de términos innecesariamente ofensivos hacia la persona del colega reclamado.

Oficiéase a la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco, para los efectos de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley Nº 4409.